



Reflexión Política

[Inicio](#) | [Año 2 No. 3](#)



Año 2 No. 3
Bucaramanga
Junio de 2000

LA DEMOCRACIA COLOMBIANA TRATANDO DE SALIR DE SU LABERINTO

Alejo Vargas Velásquez

Al iniciar el año 2000 la democracia colombiana enfrenta una serie de desafíos que de la manera cómo los afronte va a depender su futuro como nación.

A. Los problemas estructurales que la aquejan:

i) La persistente relación entre Política y Violencia en Colombia

La historia colombiana es sin duda prolífica en esta dirección, con relaciones estrechas en el acontecer político de los años 60s en que surgen las guerrillas revolucionarias y repercusiones hacia el hoy colombiano. Una relación con antecedentes remotos en nuestra historia política, que se da, con las guerras civiles del Siglo XIX entre los nacientes partidos, el Liberal y el Conservador, quienes desde muy temprano en nuestra historia republicana apostaron sus proyectos políticos a las armas, a través de las cuales comenzó ese largo tránsito de relación y entrecruzamiento entre violencia y política. Que continúa con las 'insurrecciones pueblerinas' del naciente partido político de izquierda, el Partido Socialista Revolucionario antecesor del Partido Comunista, en los años 20s del presente siglo y en las cuales esta agrupación de izquierda acude, como lo habían hecho antes los partidos políticos tradicionales, al recurso de las armas para hacer política.

Posteriormente va a ser ese período de nuestra historia reciente que conocemos como la 'Violencia' y en el cual los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, de nuevo volvieron al uso de las armas por razones o con pretensiones políticas, sólo que en esta ocasión no lo realizaron de manera formal, declarando una guerra civil, sino a través de los grupos de guerrillas liberales y conservadoras. Ese desangre colectivo se va a resolver mediante la figura del 'golpe militar', pero lo anterior dejó como secuela un período de bandolerismo, con ribetes en algunos casos de 'bandolerismo social' por sus pretensiones justicieras y los apoyos locales que en algunos casos estos comportamientos generaron.

Ya al inicio del Frente Nacional, en los 60s, veremos el inicio de la nueva ola de violencia política, ligada ahora a discursos de transformación revolucionaria del Estado y que se va a incubar en las guerrillas de mayor tradición y persistencia como son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación) a partir de la confluencia de múltiples elementos de los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de guerrillas liberales que se articulan de esta manera a la siguiente violencia.

Entonces, el conflicto social y político armado colombiano se puede considerar como uno que tiene raíces históricas y sociales determinadas. Se trata, de la pretensión de grupos organizados, de constituirse en actores político-militares que pudieran confrontar al

Estado o al Régimen Político, influenciar sus políticas públicas e hipotéticamente remplazarlo. Estas organizaciones inicialmente estaban orientadas por determinadas ideologías políticas que se constituían en paradigmas y referentes de su acción.

Es evidente que la guerrilla es producto de procesos históricos y políticos particulares, pero en todos los casos lograron insertarse más o menos en problemáticas sociales y regionales que les permitieron consolidarse y reproducirse. Así, en el transcurso del conflicto político armado hay planteado una competencia de poder entre el Estado o los sectores dirigentes, de una parte y las organizaciones insurgentes, de la otra.

En general podemos decir que los orígenes de la llamada guerrilla revolucionaria está asociada a los siguientes factores:

a) de tipo externo:

- el período de la 'guerra fría', que llevó a plantear un enfrentamiento en todos los campos entre el llamado mundo socialista y el mundo capitalista y que tuvo como resultado el que los conflictos sociales en los distintos países tendieran a verse como un subproducto de ese enfrentamiento global y tratados en consecuencia. Para algunos analistas en esta concepción se encuentra los orígenes de la denominada 'doctrina de la seguridad nacional' que orientó el actuar de los ejércitos latinoamericanos durante varios decenios;
- la 'revolución cubana' que genera un gran impacto en las juventudes latinoamericanas. Es el surgimiento del 'castrismo' como ideología revolucionaria, que privilegia la organización de tipo político?militar antes que la partidaria y que coloca todo el énfasis de la práctica guerrillera como modalidad fundamental de acción política para contribuir a crear las condiciones objetivas que posibiliten la realización de una revolución;
- la ruptura chino-sovietica, entre los dos partidos comunistas más importantes de este campo alrededor de las tesis soviéticas de la denominada 'coexistencia pacífica' entre oriente y occidente y la respuesta china de la necesidad que tenían los comunistas de propiciar la 'revolución mundial';

b) de tipo interno:

- el régimen político del Frente Nacional que constitucionalmente excluyó a quienes no fueran liberales o conservadores de toda participación en la actividad política, en la administración pública y en la administración de justicia, creando constitucionalmente ciudadanos de primera y de segunda categoría y que fue un elemento de justificación importante para acudir al uso de las armas; este arreglo constitucional es el que algunos analistas han denominado la 'democracia restringida';
- el surgimiento de la denominada 'nueva izquierda' para hacer referencia a organizaciones políticas de izquierda, distintas al Partido Comunista, como el MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil, Campesino, de influencia pro-china), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria, de tendencia gaitanista) y las JMRL (Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, con gran simpatía por la revolución cubana), que va a estimular políticamente la idea de la lucha armada, van a tener gran influencia en la juventud de la época y aportarán buena parte de los cuadros de dirección a las nacientes guerrillas (especialmente al ELN y al EPL);
- la radicalización de los sectores juveniles y especialmente los estudiantes universitarios, que los hacia proclives a aceptar los discursos radicales de la lucha armada en boga al comienzo de los sesenta;
- los remanentes de las guerrillas liberales, núcleos campesinos que mantenían así fuera simbólicamente, la esperanza de continuar su lucha guerrillera hasta cambiar las características del Régimen Político colombiano; pretendían, sin mucha claridad acerca de sus alcances, emprender un nuevo tipo de lucha guerrillera que fuera más allá del

problema liberal?conservador;
 ? la dinámica de protagonismo político nacional que vivía el movimiento estudiantil universitario, que venía de tener un gran protagonismo en la lucha contra el gobierno militar del general Rojas Pinilla y que mantuvo en los sesenta un gran dinamismo en cuanto a movilización social; no eran ajenas a estas dinámicas las influencias del MOEC, el FUAR, las JMRL y el debate dentro del Partido Comunista por la ruptura chino-soviética;
 ? la radicalización de sectores del sindicalismo, especialmente petrolero, que se planteaban la necesidad de articular las luchas sindicales a las luchas revolucionarias;
 - el 'renacer' del problema agrario, no porque éste hubiera desaparecido, sino porque fue clandestinizado por la violencia liberal-conservadora; con la Alianza para el Progreso, como respuesta estratégica del gobierno norteamericano a la revolución cubana, apoyado por los demás gobiernos latinoamericanos, la reforma agraria se puso de moda y esto situó, de nuevo, el viejo conflicto agrario no resuelto, dentro de las prioridades de las luchas sociales y políticas.

El conflicto político armado y sus protagonistas tienen entronques muy amplios en la realidad de nuestros problemas políticos, sociales y económicos. Sin embargo, la existencia de los conflictos sociales no puede ser una justificación para la persistencia de la guerra. Solucionar el conflicto político armado no es otra cosa que darle salida negociada a un período muy importante de la vida política colombiana.

ii) Las estructuras de exclusión.

En la sociedad colombiana en el largo plazo, han estado presentes una estructuras de exclusión. A pesar de sus intencionalidades, los modelos de desarrollo colombianos han excluido importantes grupos de los beneficios del desarrollo. Las políticas reformistas, en buena medida tan solo el reflejo de una u otra ideología, no han tenido cobertura real en amplios sectores sociales, y ello en antes que mejorar, ha tendido a empeorar.

Los procesos de consolidación de los Estados-Nación han pasado por una mezcla de políticas de acumulación y de redistribución, y en los últimos tiempos, marcados por los discursos neoliberales, la tendencia ha sido priorizar la acumulación y minimizar su redistribución. Los altos niveles de pobreza y de indigencia que hoy día existen en Colombia son una evidencia de ese acumulado histórico de exclusión socioeconómica.

Igual comportamiento encontramos en lo relativo a la exclusión política. La dinámica política colombiana ha estado canalizada por un sistema de partidos sustentado en un bipartidismo fluido, bipolar y sin ningún tipo de polarización lo cual le ha dado al conjunto del sistema de partidos una orientación centrípeta y poco proclive a estimular la participación electoral.

Todo lo anterior ha contribuido a consolidar una cultura política que dificulta estructuralmente la oposición y que no ha posibilitado el hacer realidad conceptos de amplia raigambre democrática como los de diversidad y heterogeneidad del sistema de partidos políticos, de una parte, y el reconocimiento del conflicto, de otra, como expresión de la multiplicidad de opiniones, fuerzas e intereses existentes en la sociedad.

Tradicionalmente el problema de la llamada exclusión regional se ha asociado a los procesos de construcción del Estado-Nación, considerando, con José Jairo González, "el espacio nacional efectivo o integrado, aquél sobre el cual el Estado se despliega con toda su legitimidad", tanto en lo espacial, en la perspectiva seguida por quienes conciben la existencia de una especie de 'polo central' definido con André Louis Sanguin como "el espacio en el cual y alrededor del cual un Estado adquiere su origen y en donde su cristalización anima la

integración" como en lo político, en lo cultural y en lo económico-social.

Es pertinente señalar, que cuando hablamos de exclusión no estamos asumiendo la posición 'conservadora', que entiende "la sociedad como una suma de partes separadas", ni la perspectiva funcionalista y armónica de la vida social a la cual es necesario integrar a los excluidos. No. Estamos concibiendo con Ivan Dechamps "que la totalidad social no aparece más como un todo homogéneo, cerrado y más o menos equilibrado, sino como un campo dinámico de relaciones y de prácticas estructuradas en torno de las funciones sociales portadoras de la unidad social."

La relación entre la región y la nación pasa por la construcción social de las regiones y éste es un proceso histórico dinámico y conflictivo en medio del cual se dio el surgimiento de las sociedades regionales y simétricamente la cimentación de la nación.

Igualmente hacemos referencia a la exclusión ejercida por diversos actores para eliminar (física, simbólica o espacialmente) todo tipo de diferencia política o de oposición a propuestas de desarrollo (económico, político, social). Es la expresión, sin duda, de una cultura intolerante y fuertemente dogmática la que orienta sus actuaciones.

iii) El problema del narcotráfico.

Colombia como ningún otro país de América Latina, ha tenido una historia muy particular alrededor del problema de las drogas: cultivos ilícitos (marihuana, cocaína, amapola), procesamiento y producción de estupefacientes, comercialización y distribución. Desde la perspectiva histórica el problema del narcotráfico pasa por el reconocimiento de la existencia de una cultura de la economía ilegal.

Surge como una actividad productiva y mercantil, de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesados fundamentalmente en la consecución del lucro personal. Esto nos muestra las tres grandes características que tiene esta actividad: ilegalidad, proyección internacional y el ser una actividad económica capitalista con grandes rendimientos, justamente por las dos primeras características.

Progresivamente se inician los procesos que intentan insertar en lo social y en lo político colombiano a estos nuevos sectores sociales y allí comienzan a presentarse choques con los sectores tradicionales dominantes y algunos subordinados de la sociedad, fundamentalmente por los reparos éticos que se le formulan a estos advenedizos.

Simultáneamente comienza un proceso de inserción económica de los nuevos capitales, proceso que en principio tiene poco rechazo. Uno de los sectores en que se inicia esta inserción, es el sector agrario, compra de tierras. Y allí se va a entrecruzar este nuevo capital con los conflictos asociados a la confrontación con la guerrilla y se van a generar regionalmente diversas modalidades de relación, unas de confrontación y otras de cooperación. En varias regiones estos nuevos propietarios de tierra van a apoyar la creación y consolidación de los denominados "grupos de autodefensa" o paramilitares, para luchar contra lo que se considera los desmanes de las guerrillas.

Dentro de esta dinámica expansiva del problema de la droga se inició una confrontación limitada con algunas instituciones estatales por algunos grupos dedicados a la comercialización y distribución detallista de la droga y de manera creciente acudieron a los métodos terroristas que de forma indiscriminada afectaban a los diversos sectores sociales, como estrategia para incrementar al máximo su capacidad de presión sobre las primeras y de intimidación generalizada sobre los segundos.

La confrontación entre instituciones estatales y los sectores del tráfico

de droga, que se desarrolló fundamentalmente alrededor del uso de la extradición por el primero, y de los métodos terroristas, por los segundos, devino progresivamente hacia la búsqueda de espacios de salida no militar, que mimetizarán una salida con visos de negociación. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 al eliminar dentro de la nueva Constitución Política de Colombia la extradición de colombianos, creó un marco normativo adecuado para buscar salidas diferentes a la de la guerra que primó al final de los 80s.

A mediados de los 90s, en la elección presidencial, la penetración de los dineros del narcotráfico en las campañas políticas hace metástasis y la legitimidad del gobierno y de parlamentarios, comienza a ser puesta en cuestión por razones éticas, pero también por la presión internacional de los Estados Unidos que se va a expresar en la descertificación y la amenaza de sanciones económicas posteriores.

Muchos analistas del conflicto armado colombiano han anotado, que la principal preocupación de los Estados Unidos en relación con esta guerra interna radica en los cultivos ilícitos y la manera como éstos pueden estar siendo la principal fuente de financiación de la misma, e incluso señalan que para ellos el único punto concreto de la 'agenda común' de negociación sería el de la sustitución de los cultivos ilícitos.

Podríamos señalar que el problema de la droga en la sociedad colombiana ha obrado como un especie de articulador y disparador de múltiples elementos que ya estaban presentes en la realidad colombiana: corrupción, desconfianza en la política y los políticos, incredulidad institucional, las múltiples violencias.

iv) Tendencia a modernizar sin democratizar:

Las elites gobernantes en Colombia a través de la historia, tuvieron la tendencia a impulsar procesos de modernización, sin que ello implicara simultáneamente democratización de la sociedad. Desde finales de los 80s centraron todos sus esfuerzos en la denominada Modernización del Estado.

Es la vieja tradición colombiana, de disociar norma y realidad, de considerar que los problemas de la realidad se resuelven simbólicamente en el ámbito normativo: frente a cada problema en la realidad la respuesta es una norma y por lo general ésta no se cumple. Y en esa medida en los últimos decenios las elites dirigentes colombianas le embolataron a la sociedad las necesarias reformas que requería para su introducción real en la modernidad y la consolidación de la democracia y el proceso de reforma del Estado, incluido allí la expedición de la Constitución Política de 1991 que en este campo fue la síntesis y la culminación de un proceso reformista iniciado quince años atrás, puso todo el acento en la modernización del estado y "olvidaron" la necesidad de la democratización del mismo.

v) La impunidad y la crisis de la justicia:

No hay duda de que en una sociedad en la cual no existan reglas imparciales para todos y jueces que las apliquen con el mismo criterio de imparcialidad, no es posible la convivencia armónica, no hay credibilidad en las instituciones estatales y hay alta probabilidad de que el recurso a la mal llamada "justicia por mano propia" se generalice y ese ha sido sin duda el caso de la sociedad colombiana.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad colombiana desde hace varias décadas, a pesar de las reformas incluidas en la Constitución Política de 1991, es el de la eficacia de la justicia y cuyo reflejo más claro son la criminalidad oculta y los índices de impunidad.

Todo indica que la impunidad es un elemento de causalidad muy grande para retroalimentar la espiral de violencia y una tentación

justificatoria para acudir a las prácticas retaliatorias.

vi) La pérdida de la confianza como valor social

La sociedad colombiana a lo largo del siglo XX desgastó inmensamente sus energías sociales tratando de sobrellevar las distintas expresiones de la violencia y éste ha sido un costo muy grande para todos los colombianos. Un costo económico expresado en inmensos recursos que se han devorado en esta vorágine, también político en lo que hace a la consolidación de la democracia y sobretodo en lo social.

Uno de los presupuestos básicos para la convivencia en una sociedad es la confianza entre los miembros de la misma y en un contexto de guerra y violencias entrecruzadas lo primero que se acaba es la confianza. Esta crisis de confianza se manifiesta, de una parte, en la dificultad para construir grandes propósitos colectivos, en la medida en que se desconfía de los liderazgos sociales, percibidos casi siempre como portadores de proyectos de doble faz, demagógicos y buscando siempre las ventajas personales. Y por supuesto esto se ha alimentado históricamente por una dirigencia política y social que no ha estado a la altura de los intereses nacionales, que ha priorizado siempre sus mezquinos intereses personales o de grupo y que ha alimentado, por acción o por omisión, distintas modalidades de violencia: la de las guerras civiles, la violencia liberal-conservadora, la llamada revolucionaria, la ligada al narcotráfico, la violencia socioeconómica.

Pero también se expresa esta crisis de confianza en los comportamientos cotidianos, mucho menos trascendentales, pero más impactantes para los colombianos y colombianas del común. Dos situaciones nos permiten ejemplificar lo anterior: una, se manifiesta en los compatriotas que al salir a la calle están siempre viendo en el otro un potencial agresor o enemigo, quién le puede robar su bolso, atracar o producirle daño y esto, por supuesto, lo predispone a tener la agresividad a flor de piel y reaccionar de esta manera ante cualquier relación social cotidiana. En la calle no percibimos a los demás como vecinos o socios de convivencia, sino a rivales, adversarios o peor aún enemigos de quienes debemos estar prestos a defendernos. Dos, esa ausencia de confianza se patentiza en la renuncia obligada a disfrutar las pequeñas grandes cosas de nuestro país: cada vez viajamos menos por carretera por temor a ser víctimas de las acciones de los actores del conflicto interno armado, las llamadas 'pescas milagrosas' o terminar en la mitad de un enfrentamiento militar; igualmente, abandonamos el espacio público, disfrutar del paseo por la calle, del parque, lugar por excelencia de disfrute ciudadano, de diversiones nocturnas, por temor a ser objeto de la inseguridad, de la violencia.

B. Lo realizado en el pasado reciente:

i) En relación con el conflicto interno armado

Colombia ha estado atrapada desde hace casi veinte años dentro de la lógica de paz y guerra: es decir, simultáneamente se desarrolla la confrontación militar mientras se hacen esfuerzos por buscar caminos de superación negociada del conflicto interno armado. Lo anterior es independiente de la voluntad de los actores del conflicto interno armado. Algunos analistas, con un poco de ingenuidad, denominan esto como la existencia de un supuesto PPlan A, que apuntaría a la paz, y un PPlan B, dirigido a la guerra, mostrándolos como la expresión perversa de los actores que no juegan limpio.

En los últimos dos decenios hemos asistido a la presencia simultánea de los dos escenarios y producto de ello se han dado procesos de negociación con organizaciones guerrilleras, exitosos unos o frustrados otros, y el desarrollo de la guerra ha continuado incrementándose y mostrando caras cada vez más dolorosas, como lo son las facetas de

toda guerra. Resultado de lo anterior fué la experiencia frustrada de construir una opción política, la Unión Patriótica, que permitiera la expresión en los ámbitos públicos y de masas de los sectores políticos excluidos y que apostaba a defender los intereses populares y democráticos de los colombianos. Pero igualmente se dieron experiencias exitosas de negociaciones con grupos guerrilleros como el M-19, un sector del EPL, la Corriente de Renovación Socialista, entre otros, que posibilitaron a grupos de colombianos alzados en armas, pero ya descreídos de sus métodos violentos, hacer el tránsito hacia una acción política legal. Asociado a estos procesos, sin duda, pero también como producto de más de un decenio de búsqueda de respuestas reformistas a las principales dificultades nacionales, se dió el proceso constituyente de 1991 que culminó con la expedición de la nueva carta política.

Las negociaciones del pasado reciente entre gobierno y guerrillas colocaron el énfasis en la desmovilización y la reinserción de sus miembros en la actividad normal de la sociedad, no sólo porque se trataba de organizaciones guerrilleras, pequeñas en su número y en su presencia militar, sino también porque se dió prioridad a negociar la desmovilización y no las causas que explican el conflicto armado interno, que debe ser la prioridad en las actuales negociaciones en ciernes.

ii) En las reformas institucionales

En los últimos años del decenio de los 80s del siglo anterior, la sociedad colombiana vivió simultáneamente una crisis de la configuración del Estado, reflejo de la transición entre dos momentos de la acumulación capitalista, de otra parte, una crisis cuasi-estructural de legitimidad del régimen político; y finalmente una agudización de esta crisis de legitimidad en la coyuntura política, que adquiere por momentos las manifestaciones de una crisis de gobernabilidad.

Las propuestas de salida a la crisis, que pusieron un gran acento al comienzo del último decenio del siglo anterior en lo institucional, se dieron dentro de una dicotomía: de una parte la búsqueda de reconstrucción de un orden político que fuera más incluyente y de otra una modernización económico-social que terminó siendo altamente excluyente. Al respecto es pertinente recordar, que históricamente lo político hace relación a la construcción del orden y el Estado es la máxima expresión de ese intento de construcción de un orden social. Pero todo orden social incluye a unos y excluye a otros y en ese sentido la tendencia del Estado es buscar un orden social cada vez más incluyente en lo político, ya que de allí deriva su legitimidad. Es por ello que el orden social está en permanente re-constitución.

Los problemas centrales de la democracia colombiana han estado atravesados por una serie de dimensiones laberínticas: se trata de fortalecer las instituciones de la democracia política representativa (incluidos los partidos políticos), de un lado, resolver el conflicto político armado, de otro, lograr espacios de participación económica y social para las grandes mayorías, de un tercero y finalmente desarrollar mecanismos de una cultura democrática que permitan romper con la tradición de violencia como forma privilegiada de resolución de conflictos y posibilitar así la construcción de un orden social, política y socialmente incluyente. Pero esto que se ha proclamado discursivamente no ha tenido correspondencia con las prácticas institucionales. Y adicionalmente ha estado altamente condicionado por unas políticas económicas que promueven y reproducen la exclusión.

Para algunos la Constitución Política de 1991 se puede interpretar como un 'Pacto de Paz' en la medida en que la misma fue presentada como producto de un proceso de negociación entre actores con poder; solo que aquellos actores que disponían de mayor poder impusieron la mayoría del nuevo texto a los restantes y éstos sólo lograron imponer su reivindicación más sentida.

iii) En lo relacionado con el crecimiento económico

Colombia fue considerado tradicionalmente como un país con un manejo conservador, pero estable de su política macroeconómica, lo cual le permitió ser el único de Latinoamérica que en la llamada década pérdida de los años 80s tuvo un pequeño crecimiento positivo, aunque hay que reconocer que parte del mismo se debió a la contribución de dineros provenientes del narcotráfico.

En los 90s la tasa de crecimiento del PIB, según datos del CID de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional fue del 4.28% en 1990; del 2.00 % en 1991; del 4.04% en 1992; del 5.39% en 1993; del 5.81% en 1994; del 5.68% en 1995; del 2.20 en 1996; del 3.05% (pr.) en 1997; del 0.40% (pr.) en 1998 y del -5.00% (py) en 1999. Sin embargo, los niveles de pobreza y de indigencia se mantuvieron, en 1978 era el 59.1% los colombianos por debajo de la línea de pobreza, en 1991 el 57.7% y en 1999 el 55.0% y la tendencia en el largo plazo ha sido hacia un agravamiento de la situación.

Pero a finales de los 90s la economía colombiana entró en una profunda crisis recesiva, acompañada de una tasa de desocupación abierta bordeando el 20 %, de dicha recesión no hay todavía señales claras en el sentido que se esté saliendo de la misma, aun cuando los cálculos oficiales esperan un crecimiento del 3.00% para el 2000.

iv) En la lucha contra el narcotráfico

Muchos analistas del conflicto armado colombiano han anotado, que la principal preocupación de los Estado Unidos en relación con esta guerra interna radica en los cultivos ilícitos y la manera como éstos pueden estar siendo la principal fuente de financiación de la misma, e incluso señalan que para ellos el único punto concreto de la 'agenda común' de negociación sería el de la sustitución de los cultivos ilícitos.

La información satelital, con base en la cual fundamentan su preocupación los norteamericanos es la siguiente para el año 1998:

Con relación a coca, había 115.450 hectáreas de cultivo bruto de las cuales se destruyeron por fumigación 13.650, quedando 101.800 de cultivo neto que producen aproximadamente 81.400 toneladas de hoja de coca y una producción de cocaína estimada de 165 toneladas. Esta cifra de 101.800 hectáreas de coca es más preocupante si tenemos en cuenta que hace diez años, en 1988, sólo teníamos 34.000 y luego de un decenio de lucha a través de la fumigación el área cultivada se ha triplicado. La distribución regional de los cultivos muestra que, es la región del sur del país en la cual la confrontación militar ha sido más intensa en los últimos años la que alberga la mayor cantidad de cultivos de coca con el 94% del total de los mismos.

En lo que hace a amapola, la información del satélite, nos reporta 6.100 hectáreas de cultivo neto con unas producciones estimadas de 60 toneladas de opio y 6 toneladas de heroína. Frente a la amapola la actividad de control parece haber sido un poco más eficaz, pues si bien no se ha dado una reducción sustancial del área sembrada, pasó de 6.540 has. en 1994 a 6.100 en 1998, por lo menos no se ha permitido un incremento fuerte de la misma. Regionalmente el cultivo de amapola de nuevo se ubica en el sur del país, con el 75% del total reportado en el país.

Pero los cultivos ilícitos son un reflejo de la perversión del modelo de desarrollo agrario vivido en la sociedad colombiana en el último medio siglo: la carencia de apoyo a los productores de economía campesina, unido a la falta de decisión política para hacer una reforma agraria real, no de mentirillas, empujó a los colonos y a los campesinos despojados de la tierra, de manera progresiva, hacia las puntas de colonización en

la Orinoquía y en la Amazonía, regiones con una riqueza en diversidad muy grande, pero con suelos frágiles para la agricultura comercial; esto sumado a la crisis de la agricultura reflejada en el desestímulo de cultivos comerciales, que dejó sin trabajo una gran cantidad de recolectores que de manera trashumante se desplazaban regionalmente al ritmo de las cosechas, muchos de los cuales se reconvirtieron en raspachines de coca. Los cultivos ilícitos fue la única alternativa que les quedó

Podemos decir, entonces, que la problemática de los cultivos ilícitos no es otra que la del viejo problema agrario no resuelto por las denominadas estrategias de desarrollo y la solución de éstos, vía la sustitución, pasa por dar respuesta sería al problema de alternativas productivas que sean económicamente rentables, y esto acompañado de dotación de infraestructura productiva (vías, crédito, asistencia técnica, mercadeo, comunicaciones) y de una infraestructura básica social (educación, salud, recreación). Entonces, efectivamente, dar respuesta no represiva a los cultivos ilícitos es en buena medida desactivar una parte sustancial del conflicto armado colombiano y saldar así parte de la deuda de nuestro desarrollo agrario.

El incremento del área sembrada en cultivos ilícitos en los últimos años, que pasaron según la Policía Antinarcóticos, de 25.600 hectáreas de coca en 1987 a 107.900 de coca y amapola en 1998, a pesar de estar todo el tiempo fumigando, es decir generando problemas adicionales de tipo ambiental, es una buena muestra del anterior fracaso. Pero con un peligroso sesgo adicional, considerar que el problema del narcotráfico son exclusivamente los campesinos y colonos productores de coca o amapola y no las redes criminales que trafican y se enriquecen con el negocio en toda su cadena productiva y de comercialización, frente a lo cual no parece haber una clara estrategia más allá de la intercepción de naves aéreas y marítimas.

C. Los desafíos a resolver en el inmediato futuro:

i) Resolver, de manera negociada, el conflicto interno armado

Porqué es tan compleja esta negociación ? Porque se trata, a diferencia de los anteriores procesos adelantados en Colombia, de intentar una solución política negociada con unas guerrillas que no han renunciado a su proyecto político-militar y que se consideran con posibilidades de éxito, por lo menos en el campo militar. Esto sitúa las conversaciones en la perspectiva de encontrar soluciones a las causas estructurales asociadas al conflicto interno armado y no simplemente lograr condiciones de favorabilidad para la desmovilización y la reinserción. Por ello la situación es completamente diferente.

Las guerrillas de las FARC y del ELN anhelan a que como resultado del proceso de negociación se produzcan reformas profundas en lo político, lo social, lo económico y lo militar y no solamente que se acuerden procedimientos para realizar las reformas en un futuro, relativamente incierto. Es decir, que en relación con cada punto de la agenda quieren, no simplemente a que haya un debate académico y que una vez agotado éste se pasa al siguiente punto de la misma, sino a que hayan conclusiones y medidas de tipo inmediato; no simples expectativas hacia el futuro. Pretenden que como producto inmediato de la negociación se realicen las reformas que se han aplazado por decenios y que están en la base de la confrontación militar.

Por su parte el establecimiento del país todavía no acepta que ese vaya a ser el costo de la negociación y buscan, en el mejor de los casos, un modelo de desmovilización y reinserción como en los anteriores procesos; con mayor generosidad, seguramente, pero finalmente un modelo de reinserción. Ellos no se han planteado seriamente la posibilidad de una estructura de poder compartida con nuevos actores

políticos y sociales, ni menos unas reformas que modifiquen sustancialmente el estilo de desarrollo, la distribución del ingreso, la estructura del poder político.

Queremos señalar que la prioridad no es solamente terminar la guerra a cualquier costo y de cualquier manera, para seguir haciendo los negocios de siempre, sino echar las bases para construir la paz. Y construir la paz es posibilitar el desarrollo para las mayorías nacionales: quiere decir estimular estrategias de desarrollo regional diferenciadas a tono con las particularidades productivas, sin pretender uniformizar realidades diversas; es el acceso a la tierra para todos los productores del campo; es la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, la formación y capacitación para desarrollar iniciativas productivas que agreguen valor a la producción regional y creen círculos virtuosos de ganancia para la gente; es permitir la expresión y participación política de las mayorías sin que las maten los 'enemigos agazapados' o sin que de antemano se encuentren derrotadas por el monopolio de los medios masivos de comunicación.

Lo lógica bipolar anterior, de escenarios de paz y de guerra con presencia simultánea, no tiene nada que ver con el deseo o la voluntad de los actores y por supuesto menos de la población civil que no está directamente involucrada en la confrontación militar. Seguramente que todos los colombianos desearíamos que no hubiera guerra, pero lo real es que existe. Por ello nos parece equivocado planterar el problema como un dilema entre paz o guerra, que ha orientado mucho el actuar de grupos que trabajan por la paz; porque si bien el dilema señalado plantea el deseo excluyente de la paz que los anima, o debiera animarlos, desconoce la presencia de la lógica de la guerra y la necesidad que tendremos, quienes apostamos a una superación negociada de la guerra civil en los próximos años, de movernos en medio de la presencia simultánea de los dos escenarios y ser capaces de apoyar y mantener las iniciativas que apuntan a la paz mientras el escenario de la guerra, desafortunadamente, sigue teniendo su desarrollo hasta tanto logremos superarlo.

Por ello a pesar de condenar todas las barbaridades de la guerra como el secuestro, la desaparición forzada, las masacres, los desplazamientos poblacionales, los asesinatos de la población civil no combatiente, tenemos que continuar apoyando las iniciativas de negociación con las distintas organizaciones guerrilleras y haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que éstas se concreten, se mantengan y se consoliden como escenarios civilizados de superación de la confrontación militar.

Para tratar de encontrar una solución negociada de este conflicto interno armado tendríamos tres caminos posibles: uno, hacerlo en el exterior y esto ha sido rechazado por la guerrilla por las experiencias del pasado reciente; dos, hacerlo en medio del cese al fuego bilateral en todo el territorio nacional, es decir parar la guerra para hablar de paz, que sería la situación ideal, pero que en el gobierno de Belisario Betancur fué criticado por mandos de las Fuerzas Armadas y dirigentes nacionales, porque según ellos era darles ventajas militares y políticas a la insurgencia, en la medida en que prohibía a las partes del conflicto militar realizar operaciones militares ofensivas; tercero, hacer ceses al fuego bilaterales en zonas del territorio nacional, que es lo que se ha denominado 'zonas de distensión o de despeje', para permitir que haya un territorio sin confrontación militar y poder allí centrar las conversaciones. Por ello sería impensable que amigos sinceros de la paz se opusieran a la creación de zonas de distensión para buscarla, para encontrarle caminos concertados al conflicto armado que nos mata y que tiene raíces sociales, políticas y económicas que debemos resolver si queremos una paz verdadera y no un armisticio transitorio. La otra solución sería la paz de los sepulcros y esa no la queremos los colombianos.

Vamos a tener en el próximo futuro dos procesos de conversaciones funcionando de manera simultánea: el del Caguán con las Farc, que es

el de mayor importancia por el peso que le ha dado el gobierno y el mayor peso militar que tiene esta organización guerrillera; el del ELN a través de la Convención Nacional con la participación de sectores de la sociedad colombiana y simultáneamente el proceso directo de conversaciones gobierno-guerrilla.

Igualmente es previsible en el corto y mediano plazo un escalamiento de la confrontación militar: esa es la dirección que ha tomado las Fuerzas Militares en su proceso de re-estructuración y reingeniería, con apoyo norteamericano, sobretudo en inteligencia satelital y en mejora de la capacidad de respuesta aérea, pero es igualmente la ruta tomada por las organizaciones guerrilleras, fortalecerse en número de hombres y de armas, en la perspectiva de dar golpes militares contundentes.

En esta dirección podría actuar el Plan Colombia que en su discurso tiene diez estrategias: económica; fiscal y financiera; de paz; para la defensa nacional; judicial y de derechos humanos; antinarcóticos; desarrollo alternativo; participación social; desarrollo humano y una estrategia de orientación internacional. En relación con la ayuda norteamericana, ligada al mismo, básicamente contra el narcotráfico y la insurgencia guerrillera 'olvidando' las otras estrategias, porque de eso se trata en el documento a consideración del Congreso norteamericano, en el cual se cambia la prioridad del apoyo de Estados Unidos: ya no se centra en la Policía Nacional como anteriormente, sino en las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército. Reitera la profunda equivocación del pasado reciente: suponer que la respuesta al problema de los cultivos ilícitos es la represión y no el dar salidas a las carencias sociales y económicas que tienen los campesinos dedicados a esta actividad productiva (para desarrollo alternativo solo contempla U.S. \$ 50 millones y \$ 100 más para reformas a la justicia, derechos humanos y paz).

Pero con un agravante adicional y es que ahora los Estados Unidos con su ayuda, por la puerta de atrás, se van a involucrar en el conflicto interno colombiano, con todas las implicaciones del caso que esto conlleva. Porque sin duda, lo que está implícito en el paquete de ayuda americana es aumentar la capacidad militar de las Fuerzas Militares para intentar modificar en favor de éstas y de manera definitiva la correlación de fuerza militar con la guerrilla. Y esto no es que necesariamente sea reprochable, pero hay que ser claro acerca de las implicaciones que esto tiene: escalamiento de la guerra interna. En cierta medida es el fortalecimiento del garrote, dentro de esa lógica de combinación de 'zanahoria y garrote' como mecanismo por excelencia para negociar exitosamente, según algunas escuelas de negociación de conflictos.

Las FARC pueden seguir intentando su conversión en una fuerza militar cuasi-regular lo que implica operación de grandes unidades militares y guerra de movimientos, pero todo indica que en este escenario la capacidad de golpearla por parte de las Fuerzas Militares es muy alta; la otra alternativa posible sería el acudir a la operación de fuerzas irregulares de pequeño tamaño con base en el sabotaje a la infraestructura y a la economía y el uso de métodos terroristas, que ha sido el camino tomado por el ELN y en esta posibilidad la capacidad de prevención o de respuesta de las Fuerzas Militares parece ser más deficiente, por el método de operación típico de la lógica de la guerra de guerrillas y por el número alto de potenciales objetivos.

Es deseable y previsible que a mediano plazo los dos procesos converjan hacia una misma Mesa de Negociación, pero va a depender del desarrollo de los mismos y de lo que suceda en el terreno de la confrontación: militar, política, social, económica.

ii) Lograr el inicio de un proceso sostenido de recuperación económica con equidad

La sociedad colombiana necesita poder estructurar una estrategia de

desarrollo económico y social, que debe ser producto de una gran concertación nacional y que garantice en el mediano plazo un crecimiento sostenido acompañado de políticas de corte redistributivo y de una inserción prudente pero sólida en el escenario mundializado de comienzos del nuevo siglo. Sólo así podrá comenzar a generarse empleo con ciertos niveles de estabilidad e iniciar un proceso de disminución de la pobreza extrema. No se trata simplemente de pensar en políticas sociales compensatorias para sostener a los más pobres, dentro un neo-populismo, sino de estrategias de redistribución de la riqueza acompañadas de propuesta de estímulo a la generación de producción de bienes y servicios.

iii) Consolidar una respuesta global al problema del narcotráfico

Evidentemente las características del narcotráfico hacen de éste un problema de muy difícil, por no decir imposible, solución por parte de un sólo país. Se requiere una estrategia concertada de la comunidad internacional, que vaya más allá de la retórica que en ocasiones acompaña las declaraciones de ésta y que implique una valoración seria de las políticas represivas y un análisis claro de alternativas de legalización o de despenalización. Esto debe ir acompañado de estrategias serias de control de los precursores químicos, del lavado de activos en las distintas economías y en los circuitos financieros internacionales, de programas de mediano plazo de sustitución concertada de cultivos ilícitos y de apoyo a los usuarios de estos distintos tipos de sustancias psicoactivas.

Solamente con una estrategia de este tipo la sociedad contemporánea puede dejar atrás el drama de este tipo de drogas en un plazo prudencial y esta es una tarea que el gobierno colombiano debe liderar con sus aliados en el concierto global. De otra manera se continuará con políticas remediales y paliativas que sólo sirven para enviar mensajes de opinión pero no para lograr alternativas serias frente a la situación problemática.

iv) Recuperar la confianza y la credibilidad social

La sociedad colombiana requiere con urgencia volver a reconstruir el tejido social y sobretodo la solidaridad, como presupuesto de la convivencia y de la formulación y desarrollo de proyectos colectivos de futuro. En esta tarea tanto la sociedad en sus diversas organizaciones y el Estado a través de sus mecanismos debe estimular una persistente campaña en esta dirección acompañada de acciones solidarias demostrativas de lo anterior, para que haya de nuevo consistencia entre lo que se dice y lo que se hace y se pueda volver a tener liderazgos sociales, y políticas con credibilidad y legitimidad. Este es el panorama que los colombianos tenemos por delante y al cual debemos dar respuesta colectiva en los próximos tiempos si queremos tener realmente un proyecto de nación.